

DEBATE EN EL PARLAMENTO BRITÁNICO A PROPÓSITO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DUQUE AL REINO UNIDO

Traducción: Esteban Góngora
estebangongora2@gmail.com

Junio 18 de 2019

El proceso de paz en Colombia: Intervención de la parlamentaria británica Jo Stevens¹

Colombia ha sufrido una de las guerras civiles más largas de la historia, más de 50 años, con miles de personas torturadas, desaparecidas y masacradas, y millones de desplazados. Es el lugar más peligroso del mundo para ser sindicalista, y los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales son asesinados regularmente con impunidad. El conflicto armado obedece al conflicto social y político. A pesar de su gran riqueza natural, la mayoría de la población vive en la pobreza. La pequeña élite urbana controla los medios y la gran mayoría de la riqueza del país. Paramilitares, guerrilla y las fuerzas del estado eran los protagonistas del conflicto. El proceso de paz empezó en 2012; había esperanza. Yo había hecho cabildeo para sindicalistas, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales; sentí que finalmente habría una posibilidad que los colombianos vivieran en seguridad en el futuro.

El incremento de los civiles que están siendo asesinados y la falta de acción por parte de la rama judicial es una de las razones por las cuales la implementación del proceso de paz es tan frágil. Nadie niega las dificultades del proceso de paz; políticos de Irlanda e Irlanda del Norte mediante la ONG Justice for Colombia compartieron sus experiencias del Good Friday Agreement (el acuerdo entre el gobierno británico y el IRA en 1998) en el marco del proceso de paz en Irlanda del Norte con las FARC para que aprendan de las lecciones.

En agosto del 2016 el gobierno y las FARC anunciaron el acuerdo final. Un cese al fuego bilateral seguido por el desarme de las FARC y la creación del partido político de las FARC. El acuerdo se refrendó en Colombia, pero uno de los críticos del acuerdo era el ex-presidente Uribe, en el poder de 2002 a 2010, las fuerzas del estado y los paramilitares, quienes tenían el apoyo del estado, fueron los responsables de estos crímenes.

Uribe fundó el partido Centro Democrático en el 2013 en gran medida para oponerse al proceso de paz en las elecciones del siguiente año. En el plebiscito ganó la oposición al proceso de paz por un pequeño margen.

¹ <https://parliamentlive.tv/event/index/34b5a3c7-0f52-4dcd-91ba-cd1e33074021?in=16:28:27>

Inicialmente parecería que la implementación estaba funcionando: el cese al fuego significó una reducción en la violencia a lo largo del país, con el 2017 como el año con menos violencia desde 1975. Hubo un cambio significativo en el 2018 con la elección del presidente Iván Duque. Él es un protegido de Uribe e hizo campaña para desmontar la mayoría de los acuerdos, especialmente cuando se trata de participación política de las FARC y el trabajo de la JEP. Ha tratado de desmontar la JEP a pesar de su reconocimiento internacional y de las víctimas del conflicto, cerrándole las puertas a la verdad, justicia y la reconciliación en el país. Esto significaría un regreso a la impunidad en Colombia. Estos retrasos amenazan con acabar la totalidad del proceso. El Reino Unido es el segundo mayor inversionista en Colombia después de los Estados Unidos y país firmante de los acuerdos de paz. El Reino Unido juega un papel vital en este proceso. El Consejo de Seguridad advirtió en abril de 2019 que los acuerdos se estaban desmontando.

Quiero enfocarme en tres puntos de los acuerdos: ponerle fin al conflicto, participación política y el papel de la JEP. Un tercio de las estipulaciones contenidas en los acuerdo no se han comenzado a implementar.

Alrededor de 1700 guerrilleros han regresado a la insurgencia desde la firma de los acuerdos. La llegada del presidente Duque al Reino Unido el 17 de junio de 2019 es importante dado que la ministra se está reuniendo con el presidente Duque más tarde hoy. Esperamos que puedan discutir estos asuntos con el presidente Duque. Desde la firma de los acuerdos, ONGs colombianas calculan que 591 dirigentes sociales han sido asesinados. 282 de estos asesinatos se han llevado a cabo desde que el presidente Duque inició su mandato.

Yo visité Colombia en la época de Uribe y en el 2011, y es desafortunado oír la falta de progreso en materia de derechos humanos en el país. Es hora de que el gobierno británico trabaje con defensores de derechos humanos para asegurar que haya un plan para defender la vida de los dirigentes sociales.

Una de las preguntas que tengo para la ministra es sobre la asistencia que el gobierno británico le está brindando a Colombia en términos de jurisprudencia y el entrenamiento que se le está dando a los magistrados. Por qué no está funcionando y por qué sigue la impunidad? 135 excombatientes han sido asesinados. Dimar Torres fue uno de la últimas víctimas, asesinado por soldados colombianos. Su cuerpo fue encontrado junto a una antigua fosa común, al parecer en un intento fallido de desaparecer los restos, lo cual se había convertido en un procedimiento común antes de la firma de los acuerdos. En una declaración del representante de la ONU para los derechos humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, éste le ha instado al gobierno colombiano de dejar de promover violencia contra los excombatientes y asegurar las garantías plasmadas en los acuerdos, especialmente el derecho a la vida.

El ministro encargado de la implementación Mr. Archila, respondió a estos alegatos diciendo que la afirmación era malintencionada y rechazaba sus conclusiones. El ex-presidente Uribe

atacó a la ONU en Twitter. Todo esto viene después de que el New York Times reveló a finales de mayo que el ejército colombiano le dio las órdenes a sus soldados de mostrar resultados en términos de enemigos dados de baja, recordando los tiempos de falsos positivos en la época del presidente Uribe. Miles de civiles fueron asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. El ministerio de defensa eventualmente dijo que cambiaría las órdenes, pero estas preocupaciones siguen. La semana pasada el ejército promovió el General Martínez Espinal a pesar de que había estado encargado de una brigada que asesinó a 24 civiles en los años 2004 a 2006.

El gobierno colombiano afirma que ha habido una reducción del 32% de asesinatos de dirigentes sociales, pero esto va en directa contradicción con los reportes de ONGs colombianas. Uribe dijo recientemente que 5000 excombatientes habían regresado a la insurgencia, pero esto es categóricamente falso. Es una estrategia de Uribe de erosionar la legitimidad de los acuerdos y la misión de verificación de la ONU, lo cual debería afectar al Reino Unido como país firmante de los acuerdos. Ayer en su reunión el presidente Duque no hizo ninguna referencia a violaciones de los derechos humanos en Colombia. Mi segundo punto es la JEP: la administración del presidente Duque ha sido reacia a implementar la JEP. Lo ve como demasiado permisivo con los guerrilleros y demasiado estricto con los militares. La ley estatutaria que es el marco referencia de la JEP, tuvo que ser aplazada después de que el presidente Duque se negó a firmar.

Finalmente en junio 2019 se aprobó la ley después de que el congreso y la corte constitucional rechazaron los cambios propuestos por el presidente. Su resistencia a una parte tan fundamental de los acuerdos debería ser preocupante para el gobierno británico, dado que refleja el desdén del gobierno colombiano a los acuerdos. El caso del congresista Jesús Santrich muestra la falta de compromiso del gobierno colombiano con los acuerdos, en particular la JEP. No hay duda que ha habido interferencia política por parte del gobierno en la JEP, notablemente por parte del ex-Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien salió de su cargo recientemente. Jesús Santrich fue un negociador clave del proceso de paz; uno de los arquitectos del acuerdo. En el momento de su arresto en abril de 2018, era miembro de la CSIVI. Iba a tomar su lugar en la Congreso de la República en julio de ese año como parte de los acuerdos. Una corte en Estados Unidos exigió su extradición por cargos de narcotráfico; cargos que el Sr. Santrich siempre negó. Fue encarcelado en aislamiento en La Picota; fui a visitarlo en su celda en agosto 2018. Tiene una enfermedad degenerativa en los ojos que lo deja prácticamente sin visión; pasó 13 meses en la Picota, en donde hizo una huelga de hambre para llamar la atención de su situación. Cuando lo conocí, las autoridades le negaron el acceso a un cuidado médico, ya que estaba en una condición frágil. Después de regresar al Reino Unido, le fue otorgada una ayuda para la discapacidad visual del congresista Santrich.

Los abogados del congresista Santrich nunca tuvieron acceso a la información que justificaba su arresto. Él presentó su caso ante la JEP, argumentando que la JEP tenía jurisdicción sobre su caso y no las cortes colombianas. El ex-fiscal Martínez cuestionó el alegato del congresista Santrich, y la JEP le pidió al ex-fiscal la evidencia que justificaba la orden de captura del congresista. El departamento de justicia en los Estados Unidos tampoco mostró pruebas, y el

15 de mayo la JEP dictaminó que no había pruebas para justificar la extradición del Sr. Santrich y que debía salir libre. La procuraduría apeló la decisión y el ex-fiscal se negó a firmar la orden de libertad del congresista Santrich; después de eso el Sr. Martínez renunció a su cargo como Fiscal General. Cuando el Sr. Santrich salió de la prisión, fue llevado en helicóptero al búnker de la Fiscalía. La Corte Suprema ordenó su liberación el 29 de mayo y se posesionó como congresista el 11 de junio. Quise narrar esta historia porque retrata la oposición del gobierno a diferentes aspectos de la implementación de los acuerdos. Ha tratado de reducir la autoridad de la JEP y sus funciones; el caso del congresista Santrich deja muy preocupados a los defensores de los acuerdos tanto en Colombia como internacionalmente, mostrando la falta de implementación, sin mencionar el incremento de las muertes de civiles y la impunidad.

El Sr. Santrich era un miembro clave del equipo negociador en el proceso de paz; es un dirigente importante del partido FARC y se ha convertido en un símbolo del proceso de paz. Espero que esta noche la ministra le pida una explicación al presidente Duque sobre la conducta del gobierno colombiano en este caso, especialmente la del ex-fiscal Martínez. Qué garantías puede tener el Sr. Santrich? Cuál es el papel del Reino Unido en su asistencia a la rama judicial colombiana en investigación y divulgación? Si seguimos con esta labor, por qué seguimos haciéndolo cuando la JEP está siendo politizada y abusada?